III. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Primera Instancia e Instrucción número Tres de San Javier

11719 Juicio ordinario 325/2015.

N.I.G.: 30035 41 1 2013 0003573

Procedimiento ordinario 325/2013

Sobre: Otras materias

Demandante: Toyota Kreditbank GmbH

Procurador: Francisco Aledo Martínez

Demandado: Melchor Martínez Escolar

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

Procedimiento ordinario 325/2013.

Juez que la dicta: Estefanía González Sanz

Lugar: San Javier.

Fecha: Veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

Demandante: Toyota Kreditbank GmbH.

Procurador: Francisco Aledo Martínez.

Demandado: Melchor Martínez Escolar.

En San Javier a veinticuatro de octubre de dos mil catorce.

Vistos por doña Estefanía González Sanz, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de San Javier, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado bajo el núm. 325/2013, promovido por la mercantil Toyota Kreditbank GMBH, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Aledo Martínez y bajo la asistencia letrada de doña Francisca Guillén en sustitución del letrado don Juan José García García, contra don Melchor Martínez Escolar, en situación de rebeldía procesal, en reclamación de la cantidad de dieciséis mil doscientos setenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos (16.277,58€), se procede a resolver con base a los siguientes

Hechos

Primero.- En fecha 8 de julio de 2013 se turnó a este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario presentado por el Procurador de los Tribunales don Francisco Aledo Martínez en representación de la mercantil Toyota Kreditbank GMBH en la que en síntesis se alegaba que en fecha 25 de octubre de 2007 se suscribió entre la actora y la demandada contrato de financiación de bienes muebles para la adquisición del vehículo marca Toyota modelo Corolla en virtud de dicho contrato la demandada se obligaba al abono de 72 recibos; ante los incumplimientos de esa obligación, en concreto, de los recibos correspondientes a los vencimientos de 01/07/2011 a 01/11/2013 y, de conformidad con el clausulado del contrato que vinculaba a las partes, se determina la liquidación de la deuda en la cantidad requerida, interesando se dicte sentencia por la que

se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de dieciséis mil doscientos setenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos (16.277,58€), más intereses correspondientes con arreglo a lo pactado, así como al abono de las costas procesales.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la parte demandada con entrega de copia de la misma y documentos acompañados, emplazándole con apercibimientos legales y no compareciendo la parte demandada se declara en situación de rebeldía procesal.

Tercero.- Convocadas las partes a una audiencia previa al juicio el día 24 de octubre de 2014, comparece la actora ratificándose en su demanda, proponiendo como prueba la documental obrante en la causa, quedando los autos vistos para Sentencia.

Cuarto.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor.

Fundamentos de Derecho

Primero.- Es principio general del Derecho que incumbe la prueba de una obligación a quién reclama su cumplimiento y la extinción al que la opone, tratándose de una regla de distribución del "onus probandi" aplicable tanto al actor como al demandado, y que les impone, respectivamente, la carga de probar los hechos que sirvan de base de las alegaciones de cada uno de las que nazca el derecho en que consista la acción o se deduzca la excepción opuesta. El art. 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, por tanto, el deber probatorio pesa sobre el accionante aún en los casos de rebeldía procesal de la parte demandada, pues, no significa en nuestro Ordenamiento Jurídico ni allanamiento en la demanda ni conformidad con los hechos de la misma, por lo que tal situación no libera al demandante de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, debiendo los tribunales resolver lo que sea más justo según el resultado de los autos (SSTS 3-04-1987, 25 -02- de 1995, entre muchas).

Segundo.- De la demanda, la documental aportada, concretamente del contrato de financiación y del documento del que se desprende la liquidación de la deuda existente entre las partes se extrae evidencia bastante de la existencia de la deuda contraída que a la luz del 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la carga probatoria que de él deriva, nos lleva a establecer que es de cargo de quien es demandado el acreditar la inexistencia de relación contractual, de la deuda y en último extremo de su cuantía si bien, ante la rebeldía del demandado y la falta de alegación ni prueba alguna de su parte, lleva a determinar la pertinencia de que se dicte sentencia estimatoria de los pedimentos de la demanda.

En consecuencia la demanda ha de ser estimada en su integridad.

Tercero.- En cuanto a los intereses, del documento contractual se concreta un tipo de interés de demora en atrasos que debe ser apreciado conjuntamente al documento liquidatorio de fecha 9 de junio de 2011. Desde esta fecha hasta el completo abono de la deuda devengarán primando dicho acuerdo. Ante el precepto 576 de la LEC hemos de determinar que los intereses pactados priman sobre los legales por lo que se acordarán de conformidad a los establecidos por acuerdo entre las partes.

Cuarto.- Según dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente rechazadas. Si la estimación o desestimación fueren parciales cada parte abonará las costas causadas en su instancia y las comunes por mitad.

Por todo lo cual, y vistos los preceptos legales citados y los de general aplicación

Fallo

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Aledo Martínez, en nombre y representación de la mercantil Toyota Kreditbank GMBH contra Melchor Martínez Escolar y, en consecuencia, debo condenar y condeno a éste último a pagar a la actora la cantidad de dieciséis mil doscientos setenta y siete euros con cincuenta y ocho céntimos (16.277'58 €) y a los intereses legales que hubieran podido devengarse de conformidad al fundamento tercero, así como al abono de las costas procesales.

Notifíquese en legal forma la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de apelación en el término de veinte días a contar desde su notificación ante este órgano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-

Publicación.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la juez que la dicta. De todo ello doy fe.-

Y como consecuencia del ignorado paradero de Melchor Martínez Escolar, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En San Javier, 13 de mayo de 2015.—El/la Secretario/a Judicial.